

REPÚBLICA DE COLOMBIA



MAGISTRADA PONENTE: MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA

| | |
|------------------|---|
| PROCESO | ORDINARIO APELACIÓN AUTO |
| DEMANDANTE | CINDY YOHANA MANCO DAVID y GABRIEL ANDRÉS URIBE JARAMILLO |
| DEMANDADOS | AYUDAS DIAGNÓSTICAS SURA S.A.S., EPS SURA y SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. |
| RADICADO | 05001-31-05-004-2020-00437-01 |
| ORIGEN | JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CTO DE MEDELLÍN |
| TEMAS Y SUBTEMAS | NULIDAD PROCESAL – Debido proceso Art. 29 CN |
| DECISIÓN | CONFIRMA |

AUTO INTERLOCUTORIO No.075

Medellín, veintiocho (28) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

En atención a lo previsto en el decreto 806 de 2020 convertido en legislación permanente a través de la Ley 2213 de 2022, una vez discutido y aprobado el presente asunto en la SALA TERCERA DE DECISION LABORAL, según consta en Acta N°004 de 2023, se procede a dictar AUTO INTERLOCUTORIO en orden a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de los **DEMANDANTES**, contra el Auto Interlocutorio del 14 de octubre de 2022, proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso de la referencia.

ANTECEDENTES

Los señores **GABRIEL ANDRÉS URIBE JARAMILLO** y **CINDY YOHANA MANCO DAVID** presentaron demanda ordinaria laboral en contra de **AYUDAS DIAGNÓSTICAS SURA S.A.S., EPS SURA y SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.** con el fin de que: 1) Se declare que los demandados son responsables de las lesiones y perjuicios sufridos por **CINDY YOHANA MANCO DAVID** en accidente de trabajo sufrido el 4 de enero de 2019. 2) En consecuencia, reclamaron condenar a **AYUDAS DIAGNÓSTICAS SURA S.A.S.** al reconocimiento y pago de la indemnización plena y ordinaria de perjuicios contemplada en el artículo 216 CST. 3) Que se ordene a **AYUDAS DIAGNÓSTICAS SURA S.A.S.** reintegrarla al puesto de trabajo que ostentaba al momento de la desvinculación junto con el pago de los salarios y prestaciones dejadas de percibir hasta el momento en que se reinsertada a sus labores.

Notificadas las entidades accionadas, procedieron a contestar la demanda, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones (Archivos 14, 16 y 18 ED).

PROVIDENCIA APELADA

En curso de la audiencia reglada en el artículo 77 CPLSS, durante la etapa de decreto de pruebas, al revisar las solicitudes elevadas por la demandada **AYUDAS DIAGNÓSTICAS SURA S.A.S.**, el Juzgado de primer grado decretó como pruebas las documentales aportadas por esta entidad, así como los testimonios peticionados en la contestación de la demanda, entre estos, la declaración de la médica laboral Claudia Patricia Zuluaga Botero (f. 12 Archivo 18 ED).

No obstante, la parte actora se opuso al decreto de aquel testimonio y formuló la alzada, tras considerar que no había imparcialidad en este puntual caso, toda vez que la declarante peticionada también efectuó un informe en relación con la calificación de pérdida de capacidad laboral de la accionante, el cual fue decretado como prueba documental. Frente a esta solicitud, el Juez negó lo argumentado por la parte actora, anotando que el auto que decreta pruebas no es susceptible de ser recurrido en apelación, en virtud del artículo 65 CPLSS.

Inconforme entonces con lo decidido, la mandataria de la parte actora alegó la existencia de nulidad procesal, reiterando lo argumentos utilizados en su oposición al decreto de la prueba, proposición rechazada por el Juez de primer grado, esbozando que, no aparece configurada causal de las enlistadas en el 133 CGP.

RECURSO

En contra de la anterior determinación, el extremo demandante presentó recurso de apelación, sustentado en que, en su parecer, se configuró una nulidad constitucional al decretarse el testimonio de la citada profesional de la salud, quien además de laborar al servicio de la demandada, suscribió informe respecto al dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral, razones que la llevan a asumir que, de recepcionar tal declaración, se estaría violentando el debido proceso. A renglón seguido, el Juzgador de instancia concedió la alzada (Archivo 27 ED).

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Mediante auto del 23 de febrero de 2023, se dispuso el traslado para alegatos a las partes, habiendo presentado los mismos la parte DEMANDANTE, oportunidad en la que, en síntesis, reiteró lo expuesto en el escrito de demanda y lo sustentado de su recurso de apelación (f.1 a 5 Archivo 03 ED).

PROBLEMA (S) A RESOLVER

El problema jurídico se centra en establecer si es procedente declarar la nulidad del Auto a través del cual el Juzgado de primer grado decretó como prueba el testimonio de la médica Claudia Patricia Zuluaga, por violación al debido proceso de la parte demandante, en razón a que aquella además de laborar al servicio de la demandada, fue la persona que suscribió el informe respecto al dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral de la actora.

CONSIDERACIONES

Sea lo primero reseñar que en atención a lo reglado en el numeral 6º del artículo 65 del CPTSS, según el cual el auto que decida sobre nulidades procesales es susceptible del recurso de apelación, esta Sala de Decisión es competente para dirimir el presente asunto, para lo cual, se seguirán los lineamientos trazados por el artículo 66A del CPTSS, es decir, ciñéndose a lo que es motivo de la impugnación.

Como quedó visto en los antecedentes factico-procesales de la presente decisión, la parte demandante alega la existencia de un vicio procesal en la determinación del Juzgado de primera instancia de decretar como prueba el testimonio de la señora Claudia Patricia Zuluaga Botero (médica laboral) solicitada por la accionada **AYUDAS DIAGNÓSTICAS SURA S.A.S.** Lo anterior, fundamentado en que, además de que la citada labora para las accionadas, también suscribió informe médico decretado como prueba documental.

Al resolver la petición anulatoria, el *A quo* la rechazó de plano diciendo que, la nulidad propuesta no aparece entre las enlistadas en el artículo 133 CGP.

Para desatar esta controversia, huelga recordar que, como el estatuto procesal del trabajo no contempla dentro de su articulado el régimen de nulidades, es necesario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 del CPTSS, acudir a al Código General del Proceso, norma que consagra puntualmente las causales configurativas de esta en su artículo 133. Dicho régimen de nulidades se forja como instrumento encaminado, principalmente, a materializar prerrogativas como el debido proceso y el derecho de defensa, atendiendo, entre otros, al principio de especificidad.

Debido a este último aspecto, se ha dado suma relevancia a la característica taxativa que envuelve este remedio procedimental, destinado como se dijo, a enderezar ciertos vicios procesales generados en el curso del litigio, y excepcionalmente después de dictarse sentencia, si ocurriere en ella, encontrando norma regulatoria de la oportunidad para su interposición, y la forma en que opera su saneamiento.

Desde esa órbita, anota la Sala, para que haya lugar a la declaratoria de alguna causal de nulidad, debe respetarse la noción de *taxatividad* que las envuelve, y solo pueden ser alegadas con base en hechos y motivos previa y expresamente contemplados en el artículo 133 CGP, circunstancia que, en principio, daría lugar a desechar la petición anulatoria de la parte demandante, como en efecto lo decidió el Juez de primer grado.

No obstante, es imperioso destacar que de tiempo atrás la Jurisprudencia tanto Constitucional como Laboral, ha sido condescendiente con el acontecer del debate procesal, entendiendo la existencia de situaciones que, si bien escapan del relato expreso de los supuestos facticos contenidos en la lista de causales de nulidad regladas hoy en la legislación, constituyen una afrenta a la garantía del debido proceso para alguna de las partes, que necesariamente debe remediarse.

A partir de esta consideración, ha tenido desarrollo la denominada nulidad constitucional por violación al debido proceso, por ejemplo, en la Sentencia T-330 de 2018 en la que se dijo:

*“(...) En primer lugar, es importante examinar si se trata de una irregularidad menor que no afecta el debido proceso. (...) **Según esta consideración, se está ante una ilegalidad que compromete el debido proceso, bien sea cuando se han afectado las reglas sustantivas que protegen la integridad del sistema judicial o que buscan impedir que se tomen decisiones arbitrarias** (...).*

(...)

*es necesario considerar el alcance del concepto de debido proceso al cual alude la norma constitucional, esto es, si se refiere exclusivamente a las reglas procesales o si también incluye las que regulan la limitación de cualquier derecho fundamental, como la intimidad, el secreto profesional y la libertad de conciencia. **En Colombia, se ha dicho que el concepto de debido proceso es sustancial, esto es, comprende las formalidades y etapas que garantizan la efectividad de los derechos de las personas y las protegen de la arbitrariedad de las autoridades, tanto en el desarrollo de un proceso judicial o administrativo como, además, frente a cualquier actuación que implique la afectación de derechos constitucionales fundamentales.** (...)*”

De ahí que el precedente mencionado plantea la necesidad de efectuar el análisis particular de cada caso, en el cual la decisión de rechazar la solicitud de nulidad por no estar ajustada a ninguna de las establecidas en el artículo 133 CGP, puede, según el caso,

configurar una actuación ciertamente lesiva al derecho sustancial, atentatoria igualmente contra el debido proceso, erigiéndose, incluso como un exceso ritual manifiesto. Así lo precisó cuándo anotó: “(...) *En el caso concreto la omisión de tener en cuenta la prueba mencionada por cuanto no se ajustaba a ninguna de las causales consagradas en el artículo 133 del Código General del Proceso, se traduce en un claro exceso ritual manifiesto que lesiona los preceptos constitucionales que garantizan el debido proceso y la prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones judiciales. (...)*”.

En concordancia con lo anterior, la Sala de Casación Laboral también ha aceptado, que, a la par de los motivos de nulidad nominados en la norma adjetiva, se invoque la nulidad “constitucional” por transgresión del artículo 29 superior, según lo dio a entender en Auto AL4032-2022: “(...) *De ahí, que las que dan lugar a su declaratoria son taxativas y solo pueden alegarse por los hechos y motivos previa y expresamente contemplados en el artículo 133 del CGP, aplicable a los asuntos laborales por expresa remisión del artículo 145 del CPTSS y, adicionalmente, puede invocarse la nulidad constitucional prevista en el artículo 29 superior, por violación al debido proceso. (...)*”.

Pese a lo anterior, también es imperativo revisar los principios que rigen el régimen de nulidades, destacándose entre estos, el de **trascendencia**, bajo el cual la doctrina ha considerado que no basta con la existencia de una irregularidad, sino que pasa a ser indispensable que el vicio advertido transgreda el debido proceso de la contraparte, que en últimas es el objetivo proteccionista por el que propende la institución de la nulidad, iterándose, que no es suficiente para dejar sin efectos determinada actuación, el simple dislate formal para desencadenar en motivo de anulación.

De esa forma lo ha recabado la Sala de Casación Civil de la CSJ, citándose a manera de ejemplo la Sentencia SC15413-2015:

*“(...) La nulidad surge como uno de los principales mecanismos que procura la salvaguarda de las formas propias del juicio, **siempre que afecten de modo importante la eficiencia del mismo**, por estar concebida excepcionalmente para aquellos casos en que el vicio no pueda corregirse de otra manera por no alcanzar el acto su finalidad.*

(...)

*Las nulidades procesales son de interpretación restringida y no admiten analogía. Se orientan bajo los principios de especificidad, según el cual aquellas no se producen si no hay norma que expresamente la consagre, el principio de protección, es decir que mientras no se declare una nulidad, el acto se considera válido y surte plenos efectos, el de disponibilidad que permite su renuncia, el de lealtad procesal que obliga a las partes a reclamarla inmediatamente la hayan observado, el de preclusión porque si la parte interesada no alega el vicio en su momento, pierde la oportunidad de hacerlo y el de **trascendencia, referido a la necesidad de que la irregularidad reclamada para que opere debe causar un perjuicio a la parte que la alega.** (...)”.*

Puestas así las cosas, en el particular, la discusión gira en torno a la posible transgresión al debido proceso atribuida al Juez de primer grado, al decretar como prueba la declaración solicitada por **AYUDAS DIAGNÓSTICAS SURA S.A.S.** de la profesional de la salud, Claudia Patricia Zuluaga Botero. Sin embargo, de entrada, considera la Sala que lo esbozado en la alzada no tiene la entidad suficiente para configurar una irregularidad de las condiciones argüidas por la recurrente.

En ese contexto, es menester recordar en primer lugar que, en el trámite probatorio emergen tres (3) aspectos protagónicos, como son, la conducencia, pertinencia y utilidad de la prueba.

Efectivamente, la **conducencia**, atiende a la idoneidad del elemento suasorio con miras a demostrar lo que se quiere probar, teniendo en cuenta las precisiones que efectúe la normativa sustantiva o adjetiva en cuanto a limitaciones en la forma como debe demostrarse determinado acto jurídico. Luego, la **pertinencia** tiene que ver con la relación

entre el hecho a probar y el medio probatorio, pues puede ocurrir que la prueba sea conducente pero no guarde vínculo con el tema debatido. Por último, la **utilidad** que se refiere a que la prueba pretenda demostrar un supuesto no acreditado en el curso del proceso, pues de estarlo, tornaría innecesario y gravoso para el litigio su recaudo (hechos notorios, hechos debatidos en otro proceso o legalmente presumidos)¹.

Resáltese entonces que el operador judicial debe analizar los anteriores aspectos desde el momento mismo del decreto de pruebas, escenario en el cual, efectivamente, tiene facultad legal para filtrar las peticiones probatorias, de cara a procurar la práctica de aquellas que considere como idóneas para resolver de fondo el litigio, a las cuales terminará por asignarles determinado valor al momento de dictar Sentencia.

En ese orden de ideas, en el particular emerge que, previa solicitud elevada en la contestación por parte de **AYUDAS DIAGNÓSTICAS SURA S.A.S.**, el *A quo* decretó como prueba para recaudarse a instancias de aquella, el testimonio de Claudia Patricia Zuluaga Botero, quien, en su condición de médico laboral fue citada, según el objeto descrito por la interesada en el acopio probatorio, a fin de declarar “(...) *sobre la trazabilidad de los diagnósticos, la existencia del accidente y sus secuelas en la persona de la demandante. (...)*”, cuestión que, en sentir de la Sala, como lo consideró el Juzgado, tiene relación directa con la materia de estudio, de cara a la verificación de cuestiones de salud de la demandante y el accidente de trabajo sufrido por aquella, aspectos sobre los cuales se busca determinar las responsabilidades de las entidades accionadas.

Luego entonces, el decreto probatorio analizado en autos no se ofrece como vulnerador de las prerrogativas constitucionales de la demandante, pues, contrario a lo sostenido por la promotora del recurso, no hay mérito para descartarse por el hecho de que la potencial declarante hubiere suscrito informe médico que hace parte de las pruebas documentales aportadas por la citada sociedad, en tanto dicha actividad no la inhabilita para rendir su testimonio en los términos del artículo 210 CGP que, para el efecto, estipula: “(...) *Son inhábiles para testimoniar en un proceso determinado quienes al momento de declarar sufran alteración mental o perturbaciones psicológicas graves, o se encuentren en estado de embriaguez, sugestión hipnótica o bajo el efecto del alcohol o sustancias estupefacientes o alucinógenas y las demás personas que el juez considere inhábiles para testimoniar en un momento determinado, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. (...)*”.

De igual modo, el vínculo laboral que la testigo sostenga con una de las entidades accionadas tampoco da lugar a impedir *a priori* el decreto y posterior práctica de la probanza, y mucho menos constituye una anomalía procesal que urja corregir, pues, a lo sumo, si la parte considera que esa circunstancia puede llegar a afectar la parcialidad de la declarante, el ordenamiento adjetivo la dota de otras herramientas distintas a la petición de nulidad, para advertir al Juzgador cognoscente de esta situación a efectos de que valore de manera especial sus dichos, de conformidad con lo establecido en el artículo 211 CGP.

Así las cosas, al no evidenciar la vulneración al debido proceso insinuada por la demandante dentro del asunto en cuestión, y sin atisbar condición que inhabilite a la llamada a atestiguar para rendir su declaración en el *sub-júdice*, cumple confirmar el auto apelado.

Las costas de esta instancia están a cargo de la demandante, incluyendo como agencias en derecho la suma equivalente a la cuarta (¼) parte del SMLMV.

Sin que sean necesarias más consideraciones, la **SALA TERCERA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**,

¹ Nisimblat Murillo, Nattan, Derecho Probatorio, Tercera Edición, Ediciones Doctrina y Ley, Bogotá, 2016, páginas 201 y 202.


RESUELVE


PRIMERO: CONFIRMAR el Auto del 14 de octubre de 2022, proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, de acuerdo con las razones esbozadas en la parte considerativa del presente proveído.


SEGUNDO: Las **COSTAS** de esta instancia están a cargo de la demandante, incluyendo como agencias en derecho la suma equivalente a la cuarta (1/4) del SMLMV.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,


MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN –
SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 054 del 29
de marzo de 2023

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>